



69

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE:	Jesús Bernardo Bustos Garzón
DEMANDADO:	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
RADICACIÓN:	15001 3333 004 2017 00155 00

I. ASUNTO

Como quiera que las partes en el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A. llevada a cabo el día veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018), las partes lograron un acuerdo respecto de las pretensiones de la demanda, corresponde al despacho decidir si el mismo se ajusta a la legalidad y por ende se puede proceder a impartir su aprobación.

II. ACUERDO CONCILIATORIO

En la etapa de conciliación de la audiencia inicial realizada el 22 de agosto del año que avanza, se llegó a acuerdo en los siguientes términos (folios 50-63):

El apoderado de la parte demandada manifestó que:

“... mediante acta No. 017 de 02 de agosto de 2018 el Comité de Conciliación de la entidad que represento...determinó que para el presente caso si le asiste animo conciliatorio a la entidad de conformidad con los parámetros del Acta No. 01 de fecha 11 de enero de 2018, para tal efecto su señoría se cancelaran 100% del valor del capital y el 75% del valor de la indexación en un término siguiente a seis (06) meses después de que se efectuó la respectiva providencia judicial, para dar cumplimiento. Ello sería por un valor total de \$2.199.276” (Minuto 9:36 DVD fl. 65)

De la propuesta se le corrió traslado a la parte demandante, quien señaló: *“la propuesta presentada por la entidad demandada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR- contenida en los siguientes valores: valor de capital 100% \$2.199.267, más una indexación del 75% por valor de \$176.258, menos los descuentos a CASUR \$92.928 y a Sanidad \$83.321, para un neto a pagarle al pensionando Bustos Garzón Jesús Bernardo de \$2.199.276, es aceptado por la parte actora, igualmente el incremento mensual que tendrá la pensión en \$34.441. El termino para cancelar estos dineros 6 meses siguientes a la radicación del fallo aprobatorio es igualmente aceptado (Minuto 10:56 DVD. fl. 65)*

Finalmente, El Representante del Ministerio Público indicó no tener objeción alguna frente a la propuesta de conciliación, traída por la entidad demandada.

El acta de conciliación y la respectiva liquidación fueron agregadas al proceso y obran en folios 50 a 62, es de resaltar que la certificación No. 96060 fue corregida, por tanto, el documento final se observa en folio 68, y en este se lee:

“Consideraciones del comité:

Al Agente ® JESÚS BERNARDO BUSTOS GARZÓN identificado con C.C No. 3.189.712, le fue reconocida una Asignación Mensual de Retiro, mediante Resolución No. 3480 de 02 de Octubre de 1997, expedida por la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional.

(...)

Dicho lo anterior y según las instrucciones de la Entidad, es viable reajustarle la Asignación Mensual de Retiro al señor JESÚS BERNARDO BUSTOS GARZÓN conforme al IPC, para los años 1997, 1999 y 2002, en el que se presentó variación en el Índice de Precios al Consumidor y por habersele reconocido el retiro en el grado de Agente.

Igualmente se le reconocerá el valor 100% del capital y se conciliará el valor del 75% de indexación el cual es señalado en el acta de conciliación respectiva. Una vez se realice el control de legalidad por parte del Juez Contencioso y el interesado allegue la respectiva providencia que haya aprobado la conciliación, la Entidad cancelará dentro de los seis (06) meses siguientes."

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Este despacho es competente para pronunciarse sobre el acuerdo objeto de este proceso, ya que se refiere a un conflicto de carácter particular y de contenido económico.

Es menester resaltar que la conciliación ha sido instituida como mecanismo alternativo, oportuno y ágil para la resolución de conflictos a través de la mediación de un tercero, institución que permite descongestionar el medio judicial por la solución directa de los conflictos de carácter particular y concreto de contenido económico, sustentados en argumentos jurídicos, fácticos y pruebas irrefutables que anuncian la alta probabilidad de condena en contra del Estado.

2. Marco Normativo Aplicable a la Conciliación en sede Judicial

El artículo 70 de la Ley 446 de 1998, señala frente a la conciliación:

"Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:

"Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1o. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.

Parágrafo 2o. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario." (Subraya el despacho)

A su turno, el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, disponía:

"Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo, el juez, de oficio, podrá citar a audiencia.

En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.

inicial llevada a cabo el 22 de agosto de 2018, siendo procedente entonces analizar los supuestos requeridos para determinar la viabilidad de la misma.

4.1. Respetto de la representación de las partes y su capacidad:

El señor Jesús Bernardo Bustos Garzón, se encuentra representado judicialmente, por el abogado Leoncio Álvaro Hernández Barón, según memorial poder visible en folio¹, con facultad expresa para conciliar; quien efectuó sustitución en favor de la abogada Avilma Isabel Castro Martínez para que asistiera a la audiencia inicial señalado que la sustituta cuenta con todas las facultades conferidas en el poder inicial (fl. 49)

La entidad demandada se encuentra debidamente representada, a través del Abogado German Eduardo Toasura Rodríguez, quien al momento de contestar la demand, allegó poder conferido por el Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con expresa facultad para conciliar (fls. 39).

Como se advierte, las partes se encuentran debidamente representadas y facultadas para participar en la conciliación realizada en audiencia inicial del 22 de agosto de 2018, en consecuencia el primer requisito se encuentra satisfecho.

4.2. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

El asunto en los términos en los que fue conciliado es susceptible de serlo, como quiera que se trate de un conflicto de carácter particular y contenido económico, es decir, en el presente caso, a pesar que el derecho cuyo reconocimiento se pretende tiene relación con la asignación de retiro del demandante (derecho irrenunciable) la esencia del mismo no se ve afectado, al respecto el Consejo de Estado ha señaló respecto a la conciliación en el caso de derechos irrenunciables:

“De modo que el juez sí puede válidamente convocar a las partes a una audiencia de conciliación aun cuando el derecho en discusión tenga el carácter de irrenunciable, o sea cierto e indiscutible cuando precisamente en esa audiencia se satisface y reconoce el derecho reclamado. En ese evento “Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley”, tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 43 de la Ley 640 de 2001.”
(Negrillas por fuera del texto).

Así las cosas, al tratarse de derechos de contenido netamente económico, es plausible realizar acuerdos conciliatorios sobre las pretensiones que se invocan a través de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles, no se renuncie a los derechos mínimos laborales y de seguridad social y el accionante en encuentre satisfacción en el derecho reclamado.

4.3. Respetto del material probatorio destinado a respaldar el acuerdo.

Como documentos que respaldan el medio de control y los perjuicios, se encuentran los siguientes:

- Resolución No. 3480 de 02 de octubre de 1997, por la cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, reconoce una asignación de retiro al señor Jesús Bernardo Bustos Garzón a partir del 13 de noviembre de 1997 (fls. 8-9).
- Petición suscrito por el accionante en el cual solicita la reliquidación su la asignación de retiro de conformidad con el índice de precios al consumidor (fl. 6 A).
- Oficio No. 8624/OAJ del 25 de octubre de 2007 por medio del cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, niega el reajuste solicitado (fls 3-5).
- Escrito petitorio radicado por el demandante el 21 de julio de 2011, solicitando nuevamente la reliquidación su la asignación de retiro de conformidad con el índice de precios al consumidor (fl. 6).

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección B, en la Sentencia del 14 de Junio de 2012, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso, en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado.

<Inciso adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.”

Ahora bien, la anterior norma fue derogada por el Código General del Proceso, norma que señala en el numeral 6 de su artículo 372 lo siguiente:

“ARTÍCULO 372. AUDIENCIA INICIAL. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: (...)

6. Conciliación. Desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. (...)” (Negritas nuestras).

Igual mandato se encuentra contenido en el numeral 8° del artículo 180 de la ley 1437 de 2011, el cual dispone:

“8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.”

Las anteriores normas sitúan a las partes en la posibilidad de conciliar sus diferencias directamente en cualquier etapa del proceso, inclusive, insta al Juez para que exhorte a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio en pro de garantizar los derechos de las partes, facilitar mecanismos de autocomposición que a la postre proveen por la descongestión del sistema judicial.

IV. CASO CONCRETO.

Del material probatorio allegado al proceso se tiene como hecho probado que al Agente ® JESÚS BERNARDO BUSTOS GARZÓN, se le reconoció asignación de retiro a partir de 13 de noviembre de 1997, de conformidad con la Resolución N° 3480 del 02 de octubre de 1997 (fls. 8-9).

A través de derecho de petición presentado el 08 de octubre de 2007 ante la entidad demandada el demandante solicitó el reajuste de su asignación de retiro conforme al Índice de Precios al Consumidor (fl.6A), petición que fue resuelta de forma desfavorable a través del Oficio No. 8624/OAJ de 25 de octubre de 2007 (fl.3-5), no obstante el 21 de julio de 2011, el actor presentó nueva petición con idéntica solicitud (fl. 6), la cual fue resuelta con oficio No. 2067 de 10 de agosto de 2011, en cual se le indicó al señor Bustos Garzón que la decisión contenida en la respuesta anterior no había variado. (fl. 2).

El señor Jesús Bernardo Bustos Garzón mediante apoderado judicial interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho buscando la nulidad de los referidos actos administrativos; una vez se notificó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, dicha entidad contestó la demanda, manifestando su intención de llegar a un acuerdo conciliatorio respecto a lo solicitado por la parte actora, situación que se materializó en audiencia

71

- Oficio No. 2067/OAJ del 10 de agosto de 2011 por medio del cual el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, señala que la respuesta dada en el oficio antes señalado, no ha variado (fl. 2).

Las pruebas señaladas demuestran los hechos en los cuales se fundamentó las pretensiones de la demanda, en tanto permiten advertir que el señor Jesús Bernardo Bustos Garzón, viene devengando asignación de retiro reconocida por la entidad accionada.

Ahora, si bien en el acta de conciliación (fl. 68) se indica que el reajuste procede también por el año 1997, es claro que como el actor comenzó a percibir asignación de retiro a partir del 13 de noviembre de 1997, la comparación entre el incremento reconocido conforme a los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional y el incremento porcentual del Índice de Precios procede desde el año 1998 y hasta el 2004, tal como lo efectuó el ente demandado al momento de liquidar los valores a cancelar como resultado de la conciliación que nos ocupa, situación que se evidencia en folio 51 , el anunciado paralelo es el siguiente:

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑO	DECRETO OSCILACIÓN	PORCENTAJE	I.P.C.
1998	058	17.96%	17,68%
1999	062	14.89%	16,70%
2000	2724	9.23%	9,23%
2001	2737	9,00%	8,75%
2002	745	5.99%	7,65%
2003	3552	7.00%	6,99%
2004	4158	6.49%	6,49%

En consecuencia, se advierte que en efecto durante los años 1999 y 2002, el incremento realizado a la asignación de retiro percibida por la parte actora fue inferior al IPC del año anterior. En esa medida concilió y aceptó atendiendo el fenómeno de la prescripción de las diferencias resultantes de la reliquidación.

4.4. Respecto de la materia sobre la cual versó el acuerdo.

Por disposición legal no hay lugar a conciliar derechos ciertos e indiscutibles; sin embargo, esto no significa que no se pueda acudir a este mecanismo para lograr su reconocimiento. En el evento de presentarse una conciliación entre las partes donde el acuerdo conciliatorio comprenda entre otras cosas, la totalidad del derecho cierto e indiscutible, perfectamente puede ser avalado o aprobado en sede judicial, ya que no ha sido menoscabado.

Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección B, en la Sentencia del 14 de Junio de 2012, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, determinó que en el campo del derecho administrativo laboral, se estableció la facultad de conciliación únicamente sobre derechos inciertos y discutibles, así como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, cuando se logra un acuerdo conciliatorio que comprenda la totalidad del derecho en litigio, perfectamente puede ser avalado o aprobado.

Por tanto, se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido.

De modo que, el Conciliador puede convocar a las partes a una audiencia de conciliación aun cuando el derecho en discusión tenga el carácter de irrenunciable, o sea cierto e

indiscutible cuando precisamente en esa audiencia se satisface y reconoce el derecho reclamado.

Con respecto de la materia sobre la cual versa la conciliación, cabe señalar que la asignación de retiro se trata de un derecho de carácter prestacional que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, por tanto, la asignación de retiro deberá tener en cuenta la Ley Marco en cuanto a la edad, el tiempo de servicio, el monto, el ingreso base de liquidación –factores-, el régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que en ese contexto la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser facultad del Gobierno Nacional.

Al respecto, el Gobierno Nacional expide los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, que regulan el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, los cuales en su orden: **el primero**, reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, **el segundo**, reforma el Estatuto del personal y Suboficiales de la Policía Nacional y **el tercero**, reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional. Normas donde se define la asignación de retiro, la forma como deben reajustarse y el principio de oscilación.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó, entre otros, a los ex servidores de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del reajuste de sus pensiones como lo disponía el artículo 14 de la precitada normatividad, esto es, teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y en consecuencia, el reajuste pensional debía hacerse como lo disponían los Decretos 1211, 1212 o 1213 de 1990, según el caso, es decir, mediante la oscilación de las asignaciones del personal de la Fuerza pública en actividad.

De aquí en adelante empieza un desarrollo normativo y jurisprudencial respecto del tema, es así como en octubre de 1995, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-461, por medio de la cual declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, consignando en dicha providencia un análisis interesante acerca de la aplicación del principio de la igualdad en el campo de las relaciones laborales.

Con posterioridad, se expidió la Ley 238 de 1995, por medio de la cual se extendió el reconocimiento de dos temas concretos de la Ley 100 de 1993, tanto a los miembros de la Fuerza Pública como de la Policía Nacional, al igual que a todos los demás sectores que inicialmente habían sido exceptuados de la aplicación del comentado estatuto general.

En el año 2004, se expidió la Ley 923, que contempló una disposición de contenido similar al que tienen los decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, respecto de los reajustes de las asignaciones de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, renovando así el principio de oscilación.

Luego en Sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional, equiparó el concepto de asignación de retiro con el de Pensión de Vejez; concepto relevante para el caso, toda vez, que parte de la discusión por la no aplicación del IPC en la reliquidación anual de la asignación de retiro, radica en que ésta, al no ser una pensión, no podría estar inmersa dentro de las posibilidades regladas por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que sólo es aplicable en materia de pensiones.

Así al poco tiempo de haberse proferido la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 4433 de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de oscilación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”; con la entrada en vigencia de esta norma, es necesario reiterar y destacar que el principio de oscilación, se encuentra en pleno vigor respecto del personal de la fuerza pública que se esté devengando asignación de retiro o pensión militar o policial, luego de aquí en adelante el reajuste de las asignaciones de retiro no puede ser inferior al IPC.

Finalmente tenemos que el Consejo de Estado, en Sentencia del Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil Once (2011).- Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00141-01(1479-09), C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, señaló que es viable reconocer el derecho de los miembros retirados de la Fuerza Pública o sus beneficiarios, el incremento

2

de la asignación de retiro como de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor, pero solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que una vez más, estableció el principio de oscilación para el incremento de las asignaciones de retiro y pensiones. En todo caso, y de haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción, se dará aplicación al mismo. De igual forma precisó, que como quiera, que la base pensional se ha modificado, con ocasión de la aplicación del IPC, es claro que necesariamente este incremento incide en los pagos futuros y por ende mal puede establecerse limitación alguna, cuando este incremento no se agota en un tiempo determinado.

En conclusión, tenemos que el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.

Como se expuso en líneas anteriores los miembros retirados de la Fuerza Pública o sus beneficiarios, tienen derecho al incremento de la asignación de retiro conforme al Índice de Precios al Consumidor, pero solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que una vez más estableció el principio de oscilación para el incremento de las asignaciones de retiro y pensiones.

Por lo anterior, establece el despacho que al accionante en su calidad de Agente Retirado de la Policía Nacional, le asiste el derecho al reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC, de acuerdo a la normativa ya indicada para los años 1999 y 2002, es así que el acuerdo al que llegaron con la entidad accionada no lesiona sus derechos ciertos e indiscutibles, pues cabe anotar que la liquidación realizada por Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR tiene en cuenta el 100% del valor del capital y el 75% del valor de la indexación. Por lo que se concluye que el acuerdo no lesiona los derechos ciertos e indiscutibles de la solicitante, pues, únicamente se está cediendo el 25% de la indexación, suma que de acuerdo a lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de 20 de enero de 2011, Magistrado Ponente: doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, es conciliable por tratarse de una corrección monetaria.

4.5. Respetto a la no afectación del patrimonio público.

Es importante anotar que el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

"(...) La conciliación es un instituto de solución directa de los conflictos, constituida a partir de la capacidad dispositiva de las partes y cuya bondad como fórmula real de paz y como instrumento de descongestión de los despachos judiciales está suficientemente demostrada.

En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que deben tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del art. 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en "las pruebas necesarias" que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado-en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes-, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...) ²".

Así entonces, acreditado que el señor Jesús Bernardo Bustos Garzón tiene derecho al reajuste de la asignación de retiro de la cual es beneficiario, de conformidad al IPC que es más favorable, y teniendo en cuenta que el comité de conciliación de la entidad a través del acta No. 17 de conciliación del 02 de agosto de 2018, a través de la cual se adoptan las políticas de conciliación por el gobierno nacional, la cual junto con la liquidación respectiva

²Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Dr. Alirio Eduardo Hernández Enríquez, Expediente No. 85001233100020030009101, veintinueve (29) de enero del dos mil cuatro (2004).

contienen una obligación clara, expresa y exigible, documentos visibles a folios 68 y 51 a 62, es procedente aprobar el presente acuerdo conciliatorio, el que previene que a futuro a la entidad le implique mayores gastos.

En las condiciones inmediatamente registradas, el acuerdo efectuado no lesiona el patrimonio de la administración pública: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, pues se trata en este caso de compensar al demandante por la falta de pago del Reajuste de su asignación de retiro, de acuerdo al IPC, para los años 1999 y 2002, y así mismo el pago de los últimos cuatro años (por el fenómeno de la prescripción), acordando que el reajuste es efectivo partir del 27 de septiembre de 2013 al 22 de agosto de 2018, arrojando los siguientes valores: capital 100% \$2.434.278 M/cte, indexación al 75% \$176.258, menos los descuentos de CASUR por la suma de \$92.928 y los descuentos de sanidad por la suma de \$83.321 para un total a pagar de \$2.199.276.

Ahora, el acuerdo llegado por las partes no reconoce sumas por encima del valor real. Resalta el Despacho que el acuerdo logrado por las partes se erige como una verdadera conciliación llevada a su máxima expresión como mecanismo alternativo para la solución de un conflicto por mutuo consenso, en tanto la parte actora aceptó la propuesta presentada por Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, renunciando así, únicamente a un porcentaje del valor de la indexación, y a las sumas que prescribieron, situación que hace más evidente la preservación del patrimonio público y la bondad de la conciliación, en procura de la protección de los derechos ciertos e indiscutibles del convocante, razón por la cual merece ser aprobada.

4.6. Respecto de la caducidad de la acción.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011, preceptúa que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. El acuerdo que se revisa tiene como objeto la reliquidación y pago de la asignación de retiro devengada por la demandante al IPC, para el tiempo comprendido entre el 1997 y el 2002. Es así, que en el asunto de la referencia, no se encuentra configurada la caducidad, por cuanto se trata de la nulidad de un acto de la administración que negó la reliquidación de una prestación periódica.

V. CONCLUSIÓN

Recapitulando el Despacho dirá que verificado el cumplimiento de los requisitos que son indispensables para impartirle aprobación al acuerdo logrado, referidos a la debida representación de las partes, el material probatorio aportado al proceso, la no afectación del patrimonio público y el haberse presentado la demanda en tiempo oportuno, así como la no afectación de derechos ciertos e indiscutibles se aprobará la conciliación judicial celebrada en el presente proceso.

Se precisa, que se aprobará el acuerdo al que llegaron las partes, el cual se pagará de la siguiente manera: *“...Una vez, se realice el control de legalidad por parte del juez contencioso; y el interesado allegue la respectiva providencia que haya aprobado la conciliación y además documentos requeridos, la entidad cancelara dentro de los seis (6) meses siguientes...”* (f. 68).

Al respecto la apoderada de la parte actora no se opuso por el contrario manifestó que *“...El termino para cancelar estos dineros 6 meses siguientes a la radicación del fallo aprobatorio es igualmente aceptado* (Minuto 10:56 DVD. fl. 65)

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la conciliación realizada entre el Señor **Jesús Bernardo Bustos Garzón** y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, por la suma de **dos millones ciento noventa y nueve mil doscientos setenta y seis pesos (\$2.199.276)**, valores que serán pagados por la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional**

73

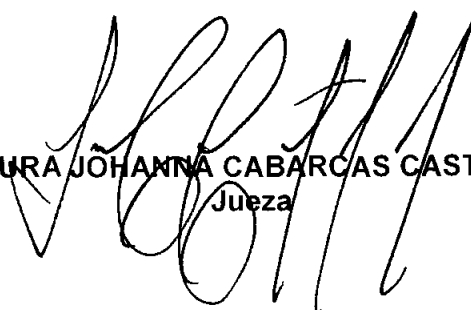
CASUR, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de pago, obligación contenida en la liquidación allegada a la audiencia inicial realizada el 22 de agosto de 2018, documentos que obran a folios 68 y 51-62

SEGUNDO: Esta providencia, así como la liquidación anexa visible a folios 51-62, prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada material, a favor del señor **Jesús Bernardo Bustos Garzón**, identificado con C.C. No. 3.189.712.

TERCERO: En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y de la liquidación obrante a folios 61-62, con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del C.G.P. en los términos del Acuerdo PSAA16-100458 de 12 de febrero de 2016.


CUARTO: Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente dejando las constancias y anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.


LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Jueza

3CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
Nº 4 De Hoy 24 de agosto de 2018 A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ



3 Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 24 de agosto de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fernel Mauricio Díaz Hernández – Secretario.